



Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco

EXPEDIENTE: 637/2022
Sexta Sala Unitaria

SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA.

Guadalajara, Jalisco, a **26 VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS.**

V I S T O S los autos para resolver en Sentencia Definitiva el juicio en materia administrativa radicado con el número de expediente 637/2022, promovido por [REDACTED], por su propio derecho en contra de las Autoridades **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y:

R E S U L T A N D O:

1. Por acuerdo de fecha **25 VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS**, se recibió el escrito de demanda presentado por [REDACTED], por medio del cual se le tuvo por su propio derecho interponiendo juicio administrativo de nulidad, el cual, por haber sido promovido en tiempo y forma, se admitió en contra de las Autoridades Demandadas **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y señalando como resoluciones administrativas impugnadas:

1. El cobro por el derecho al refrendo anual por los años 2021, así como los recargos, actualizaciones y multas, emitidos por la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

2. La cédula de notificación de infracción identificada con número de folio 333936844, emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

3. La cédula de notificación de infracción identificada con número de folio 201943519112, a cargo de personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.

Así mismo se admitieron las pruebas ofertadas por no ser contrarias a la moral y encontrarse ajustadas a derecho. Se requirió a las autoridades demandadas para que al momento de dar contestación a la demanda remitiera copia certificada de las resoluciones impugnadas. Con las copias simples del escrito de demanda y anexos se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que dentro del término de **10 DIEZ** días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra apercibida que de no hacerlo así se le tendrían por ciertos los hechos que el actor le imputó de manera precisa salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultasen desvirtuados.

2. Por auto de fecha **1 UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS**, se tuvo por recibido el escrito presentado por **CELIA BERTHA ÁLVAREZ NÚÑEZ**, en su carácter de **DIRECTORA DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda instaurada en su contra por la Accionante, así mismo se admitieron las pruebas ofertadas, por lo que con las copias simples del escrito de contestación se ordenó dar vista a la parte actora para manifestar lo que a su derecho correspondiera.

Se tuvo a la citada autoridad remitiendo copia certificada del Requerimiento de Pago identificado con el número de folio **M421004195932**, relativo al crédito por concepto de la falta de pago de derecho de refrendo de tarjeta de circulación y holograma relativo al ejercicio fiscal 2021, acto administrativo del cual se concedió a la Parte Actora el término legal para que formulara su ampliación de demanda.

Del mismo modo, recibió el escrito signado por **LUIS ROBERTO DÁVILA SÁNCHEZ**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en contra de la Secretaría a quien representa, y mediante el cual opuso excepciones y defensas, así como ofreciendo los medios de convicción que de su escrito se desprendían y por no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas desde aquellos momentos puesto que su propia naturaleza así lo permitía.

También se recibió el escrito signado por **CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CUELLAR**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, y por medio del cual se le tuvo produciendo contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en contra de la Autoridad Municipal a quien representa, y mediante el cual opuso



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

excepciones y defensas, así como ofreciendo los medios de convicción que de su escrito se desprendían y por no ser contrarias a la moral ni a las buenas costumbres se admitieron la totalidad de las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas desde aquellos momentos puesto que su propia naturaleza así lo permitía.

3. Mediante actuación judicial de fecha **14 CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, se advirtió que la Parte Actora no ejerció su derecho a ampliar demanda en contra del acto administrativo remitido por la Autoridad Hacendaria Estatal, ello no obstante haber sido legalmente notificada del auto de fecha 1 uno de diciembre del año 2022 dos mil veintidós, motivo por el cual se le tuvo por perdido tal derecho.

Finalmente, visto el estado procesal que guardaban los autos, tomando en consideración que no existía cuestión alguna pendiente por resolver, ni pruebas pendientes por desahogar, se ordenó traer los autos a la vista de las partes para que en el término de **3 TRES** días formularan por escrito sus alegatos y una vez transcurrido en demasía dicho periodo; se ordenó poner los autos a la vista del Magistrado Presidente de esta Sexta Sala Unitaria para que fuese dictada la Sentencia Definitiva.

CONSIDERANDO:

I.- COMPETENCIA. Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver de la presente controversia, de conformidad a lo establecido por los artículos **52, 56, 57, 65, 67** y concordantes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; **1, 2, 3, 4, 5 y 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; **1, 2, 3, 4, 6, 9, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 57, 58, 72, 73 y 74** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II.- PERSONALIDAD. La personalidad de la parte actora [REDACTED], quedó debidamente acreditada en autos, de conformidad con el artículo **36 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

La personalidad de la autoridad demandada **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos pues en su representación legal acudió a juicio el ciudadano por **CARLOS ALBERTO RAMÍREZ CUELLAR**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**. La personalidad de la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos pues en su representación legal compareció el funcionario **LUIS ROBERTO DÁVILA SÁNCHEZ**, en su carácter de **DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, mismo que acreditó al haber aportado copia certificada de su nombramiento. A su vez, la personalidad de la autoridad demandada la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, quedó debidamente acreditada en autos, en virtud de que la funcionaria **CELIA BERTHA ÁLVAREZ NÚÑEZ**, quien se ostentó en su carácter de **DIRECTORA DE LO JURÍDICO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, compareció en su representación legal, lo anterior en términos de los numerales **6 y 44 fracción II** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

III.- VÍA. La Vía Administrativa elegida por la parte Actora es la indicada, toda vez que se trata de combatir un acto administrativo de autoridad, de conformidad en lo previsto por los artículos **1º, 2º, 9º** y demás relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

IV.- ACCIÓN. La acción puesta en ejercicio por la parte Actora se encuentra debidamente prevista en el artículo **1º** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

V.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA. Tanto los conceptos de impugnación, como los medios de defensa que hizo valer las Autoridades Demandadas, no se transcriben por economía procesal, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen en la presente resolución, siendo aplicable la siguiente Jurisprudencia, misma que se transcribe y que a la letra dice:

No. Registro: 196,477.

Jurisprudencia

Materia(s): Común. Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VII, Abril de 1998

Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.- MEDIOS DE CONVICCIÓN OFERTADOS POR LAS PARTES. Enumeración y valoración de las pruebas ofertadas por cada una de las partes, mismas que han sido admitidas por esta Sexta Sala Unitaria a través de los acuerdos correspondientes.

Pruebas ofertadas por la parte actora:

1. Documental Pública: Consistente en el Recibo Oficial de Pago de número **A56702506**, emitido por la Autoridad Hacendaria Estatal en favor de la Accionante del presente juicio, donde se reconoce el carácter de propietario del vehículo identificado con el número de placas de circulación **JDW4525**, mismo que resultó idóneo para acreditar el interés jurídico que le asiste y al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos **399 y 400** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

2. Elemento Técnico: Consistente en la impresión del adeudo vehicular, respecto del vehículo identificado con el número de placas **JDW4525**. Medio de prueba al que es posible otorgarle valor probatorio de conformidad a lo establecido por el artículo **298 fracción X, 406 bis y 418** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, norma de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; en virtud de que la información que de él se desprende, fue obtenida a través de una página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco.

3. Documental Privada: Consistente en los de recepción de las solicitudes debidamente elevadas por la Actora a través de la Plataforma Nacional de Transparencia donde instó a las autoridades demandadas la expedición de las copias de las resoluciones impugnadas, medios de convicción al que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo **403** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

4. Presuncional Legal y Humana: A la que se le otorga valor probatorio de acuerdo con los numerales **415 y 417** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

5. Instrumental de Actuaciones: Probanza a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo previsto por el arábigo **402** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado de manera supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada de la Secretaría de la Hacienda Pública:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35 fracción VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

3. Documental Pública: Consistente en la copia certificada del Requerimiento de Pago identificado con el número de folio **M421004195932**, relativo al crédito por concepto de la falta de pago de derecho de refrendo de tarjeta de circulación y holograma relativo al ejercicio fiscal 2019, al que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos **399, 400 y 413** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Pruebas ofertadas por la Autoridad demandada Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.



2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35** fracción **VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

Pruebas ofertadas por la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco:

1. Instrumental de Actuaciones; Consistente en todas las actuaciones dentro del presente procedimiento, ahora bien, toda vez que la oferente no precisó qué actuación en concreto le beneficiaba y los hechos controvertidos que pretende demostrar con la misma dicha probanza carece de valor probatorio.

2. Presuncional Legal y Humana; La cual hizo consistir en las presunciones tanto legales como humanas que sean tendientes a favorecer sus intereses, prueba esta que si bien fue admitida en autos, la misma falta al cumplimiento de lo estipulado por los artículos **35** fracción **VIII** de la Ley de Justicia Administrativa en relación con el **417** del Código de Procedimientos Civiles, ambos cuerpos de leyes del Estado de Jalisco, pues no se precisa cual es el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir y el enlace preciso existente entre uno y otro, por lo que no se le otorga valor probatorio.

VII. ESTUDIO DE LA CASUAL DE IMPROCEDENCIA. Previo a entrar al estudio del fondo de las cuestiones que son planteadas al que resuelve, con fundamento en lo establecido por el artículo **30** último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual dispone: “...**el sobreseimiento se podrá decretar en cualquiera etapa procesal, incluyendo la sentencia definitiva**...”, en ese sentido, es que este Juzgador, debe analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas por las partes, así como las que este Juzgador pudiera estimar actualizadas oficiosamente; siguiendo esa línea de ideas, este Magistrado Instructor se avoca al estudio de la causal de improcedencia que la Directora Contenciosa de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco estimo actualizada en la presente causa, misma que consiste en las hipótesis contemplada en la fracción **IX** del artículo **29** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el artículo **1** de la Ley antes citada, al argumentar que no procede el presente juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general toda vez que fue una ley emanada por el Congreso y por ende que debió de haberla combatido mediante la interposición de una demanda de amparo indirecto y no mediante juicio de nulidad en materia administrativa.

Por otro lado, este Juzgador, debe analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento alegadas por las partes, así como las que este Juzgador pudiera estimar actualizadas oficiosamente.

Siguiendo esa línea de ideas, este Magistrado Instructor esta Sexta Sala Unitaria de forma oficiosa advierte la actualización de la hipótesis prevista en la **fracción IV** del artículo **29** de la Ley de Justicia Administrativa, pues la resolución de la que se duele la parte actora, consistente en el crédito por concepto de refrendo anual vehicular del ejercicio fiscal 2021 fue contenida tácitamente al no haberse promovido el presente sumario en tiempo y forma, ello en atención a que el Requerimiento identificado con el número de folio **M421004195932**, que corresponde al crédito fiscal determinado por concepto de falta de pago de refrendo relativo al ejercicio fiscal 2021, fue notificado a la accionante del presente juicio el día 5 cinco de julio del año 2021 dos mil veintiuno, por ello toda vez que la presente controversia se hizo valer hasta el día **14 catorce de febrero del año 2022 dos mil veintidós**, evidentemente se encuentra trascurrido en exceso el término previsto por el artículo **31 tercer párrafo** de la Ley de Justicia Administrativa, y por tanto se actualiza la casual en comento, misma que establece que será improcedente el juicio de nulidad en materia administrativa en contra de actos que hayan sido consentidos de manera tacita o expresa. Con la finalidad de resolver la causal de improcedencia señalada con anterioridad, se considera oportuno citar el contenido del numeral en comento, mismo que a la letra establece lo siguiente:

Artículo 29. Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:

[...]

IV. Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito. Se entiende que hay consentimiento tácito únicamente cuando no se promueva el juicio en materia administrativa en los términos previstos en esta ley;

[...]

Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;



Ahora, del análisis que este Juzgador realiza a las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en el escrito de demanda, la parte accionante manifestó que con **21 veintiuno de enero del año 2022 dos mil veintidós**, se dio por enterado de los actos administrativos que en esta vía se combaten una vez efectuó el pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación en una Oficina Recaudadora dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuando advirtió que el vehículo de su propiedad identificado con el número de placa de circulación **JDW4525**, contaba con diversos adeudos por concepto de los actos materia de la presente controversia.

En tales condiciones, en atención de lo anterior fue que mediante el auto admisorio, ésta Sala requirió a las autoridades demandadas para que, al momento de producir contestación a la demanda entablada en su contra, exhibieran las copias certificadas de las resoluciones combatidas, para efecto de que el accionante tuviera conocimiento de las mismas y se encontrara en aptitud de combatir las mediante la ampliación de demanda correspondiente.

En ese contexto, de las piezas que obran agregadas en autos, se advierte que la autoridad que compareció en representación legal de la Secretaría de la Hacienda Pública, remitió las copias debidamente certificadas del documento identificado con el folio **M421004195932**, que corresponde al crédito fiscal determinado por concepto de falta de pago de refrendo relativo al ejercicio fiscal 2021, **así como su constancia de notificación de fecha 5 cinco de julio y su citatorio previo de fecha 2 dos de julio, ambos del año 2021 dos mil veintiuno**, por lo que, en atención a la remisión de dichas constancias, éste Juzgador ordenó correr traslado a la demandante, para que realizara la ampliación de demanda, esto tal y como se advierte del auto de fecha 1 uno de diciembre del año 2022 dos mil veintidós.

Ahora bien, no obstante lo anterior la parte actora **no ejerció su derecho a formular la ampliación de demanda correspondiente**, y ante tal circunstancia, al no haber controvertido en forma alguna y mucho menos especifica los documentos remitidos por las autoridades demandadas y en lo que aquí interesa, la constancia de notificación aludida, relativo al documento identificado con el folio **M421004195932**, es que este Juzgador estima que en el caso concreto, se actualiza la causal en estudio.

Lo anterior resulta ser así, pues del contenido del requerimiento en comento, se advierte que en él se determinó una multa precisamente por la falta de Pago del derecho de Refrendo Anual vehicular relativo al ejercicio fiscal **2021**, así como la determinación propia del derecho en comentario y los gastos de ejecución que de este derivaron, por ello, con las constancias aportadas a juicio por parte de la señalada autoridad, queda desvirtuada la manifestación vertida por la impetrante de nulidad, en cuanto a la fecha de conocimiento de tales actos, misma que según se aprecia de su escrito de demanda, señaló el día 21 veintiuno de enero del año 2022 dos mil veintidós, de ahí que al no haber combatido la presunción de legalidad de la constancia de notificación remitida por la Autoridad, así como tampoco la propia determinación del derecho de que se trata y los accesorios que de éste derivaron, se concluye que la parte Demandada desvirtuó la manifestación expuesta por la accionante y por ende deba tenerse como fecha de conocimiento del crédito fiscal por el derecho de Refrendo Anual vehicular relativo al ejercicio fiscal **2021**, aquella que se demostró fehacientemente con las constancias de mérito, esto es, **el 5 cinco de julio del año 2021 dos mil veintiuno**.

Ello resulta ser así, pues la parte actora tuvo la oportunidad de formular su escrito de ampliación de demanda en contra de todas aquellas constancias remitidas por las demandadas, entre ellas las citadas constancias relativas al citatorio y notificación del requerimiento de pago exhibidos en actuaciones, sin embargo, con sustento en lo establecido por el artículo **38 fracción III segundo párrafo** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y en consideración de que todos los actos de autoridad se encuentran investidos de una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por el accionante de un juicio administrativo de nulidad, es que este Juzgador concluye que en el caso concreto ha quedado plenamente acreditada la causal de improcedencia contenida en la fracción **IV** del artículo **29** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, pues la parte actora al desatender la oportunidad procesal para exponer conceptos de impugnación en contra de la actuación del ejecutor fiscal encargado de levantar la diligencia de notificación del requerimiento aludido, **dejo su contenido intocado por ello prevalece la presunción de legalidad de los actos de referencia**.

Lo anterior resulta ser así pues no debe precisarse que los procedimientos en materia administrativa deben ser apegados a estricto derecho y, por tanto, no puede suplirse la deficiencia de la queja ante los planteamientos jurídicos efectuados formalmente y en el caso particular, toda vez que la actora no atacó en forma alguna y mucho menos contundente la constancia de notificación y el citatorio de mérito, así como tampoco los fundamentos y motivos contenidos en el señalado acto impugnado, acorde a lo previsto por el artículo **31 tercer párrafo** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que establece que el juicio contencioso administrativo local deberá hacerse valer dentro de los 30 treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o **a aquél en que se haya tenido conocimiento del mismo**, es que se concluye que en la especie resulta improcedente decretar el sobreseimiento de los actos impugnados consistentes en el crédito determinado



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

a través del documento identificado con el folio **M421004195932**, al actualizarse la casual invocada en párrafos anteriores.

VIII.- ESTUDIOS DE LA ACCIÓN Y DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. Sin que de oficio se advierta la existencia de causal de improcedencia alguna por resolver, esta Sexta Sala Unitaria se avoca al estudio de la litis en los términos previstos por los ordinales **72 y 73** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Como una noción de primer orden, acorde a lo estipulado en la fracción **I** del segundo de los arábigos invocados en el párrafo anterior, debe precisarse que los actos controvertidos en la presente instancia resultan ser la cédula de notificación de infracción identificada con número de folio **333936844**, emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y la cédula de notificación de infracción identificada con número de folio **201943519112**, a cargo de personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.; actos recaídos al vehículo identificado con el número de palcas **JDW4525**.

Ahora bien, este Juzgador estima pertinente que el estudio de la presente controversia se aborde en tiempos diversos, acorde a la naturaleza de los actos impugnados en comentario, y en atención a la causa de pedir plasmada por la parte actora en su escrito de demanda; en ese contexto, primeramente se analizará la validez de las cédulas de infracción mencionadas y con posterioridad lo relativo al cobro del refrendo anual de tarjeta de circulación.

Fijados los actos impugnados, esta autoridad jurisdiccional procede a realizar un análisis de la demanda interpuesta, ya que la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, el artículo **35** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ni algún otro precepto contenido en dicho ordenamiento, que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda. Robustece el criterio asumido por esta autoridad, la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, misma que encuentra aplicación analógica.

*Época: Novena Época
Registro: 1003972
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1.
Común Segunda Parte - TCC Sexta Sección -
Procedimiento del amparo indirecto
Materia(s): Común
Tesis: 2093
Página: 2410*

DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO.

La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.

Así pues, se tiene que la parte actora en su escrito inicial de demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos impugnados el día **21 veintiuno de enero del año 2022 dos mil veintidós**, al momento de realizar una consulta al portal electrónico de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, visible en la siguiente dirección:

<https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos>

En ese contexto, de la información que de dicha plataforma digital se desprende advirtió que el vehículo de su propiedad identificado con el número de palca de circulación **JDW4525**, contaba con un adeudo constituido por concepto de los actos materia del presente juicio, motivo por el cual, como lo acredita con los medios de convicción ofertados al presente sumario, elevó la solicitud de expedición de información ante las autoridades hoy demandadas con la finalidad de que le fueran dadas a conocer las resoluciones impugnadas, instancias que a la fecha de la presentación de la demanda no fueron atendidas, por ello, acudió ante este Tribunal a solicitar la nulidad de los actos impugnados que se precisaron con anterioridad pues según refiere no le fueron dados a conocer.



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

Analizadas las piezas de actuaciones, este Juzgador estima que en el caso concreto, ante la manifestación vertida por la Parte Actora en sentido de desconocer el contenido documental de los actos combatidos, **invariablemente resultaba una obligación para las Autoridades Demandadas exhibir a juicio ya sea en original o en copia certificada dichos actos**, pues de conformidad con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante ese supuesto -cuando un actor se manifiesta desconocedor del acto administrativo que impugna- al momento de contestar las demandas se encuentran obligadas a exhibir la constancia que acreditara la existencia de los actos combatidos, así como aquellas relativas a su notificación.

En ese contexto, atendiendo a que la **Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y la Dirección de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**, no dio cumplimiento a dicha carga procesa, el suscrito Magistrado concluye que se desatendió la obligación que impone el numeral **286** del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismo que conmina a la Parte Accionante de un procedimiento judicial a acreditar los elementos constitutivos de su acción y así mismo, al Demandado de acreditar sus excepciones, por lo que, al haber incumplido con tal obligación, **dicha omisión conlleva la declaración de la nulidad lisa y llana de las cédulas de infracción que les fueron atribuidas**, en razón, insístase, por no ofrecer los medios necesarios para acreditar su existencia. Robustece el criterio adoptado por esta Sala, aplicadas por analogía y en lo conducente, las siguientes Jurisprudencias:

*Época: Novena Época.
Registro: 170712
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 209/2007,
Página: 203*

JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.

Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de seguridad jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.

*Época: Décima Época.
Registro: 160591
Instancia: SEGUNDA SALA
Tipo Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Localización: Libro III,
Diciembre de 2011, Tomo 4.
Materia(s): Administrativa*



**Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco**

*Tesis: 2a./J. 173/2011 (9a.)
Pag. 2645*

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.

Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA SALA

En virtud de lo anterior, habiendo resultado procedente el concepto de nulidad en estudio para declarar la nulidad lisa y llana de las cédulas de notificación impugnadas en el sumario que nos ocupa, consecuentemente esta Sexta Sala Unitaria tiene a bien declarar la nulidad lisa y llana de la totalidad de los accesorios que derivan de tales actos como resultan ser recargos, actualizaciones y gastos de ejecución, por constituirse como frutos de actos viciados de origen. Resultando aplicable al caso en particular la siguiente Jurisprudencia:

*Registro: 252103
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 121-126,
Sexta Parte Materia(s): Común;
Página: 280*

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.

IX.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Con fundamento en los artículos **6, 16** segundo párrafo, **17 y 116** fracciones **V y IX** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **70** fracción **XXXVI** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; **5** fracciones **I y III** y último párrafo, y **22** fracciones **I, IV y VIII** de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; **6, 7** fracciones **III, IV, VII y VIII, 91** segundo párrafo y **93** de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo **8** numeral **1** fracción **VII** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo **4** numeral **1** fracciones **I y III**, numeral **2**, y artículo **15** numeral **1** fracciones **I, II, V y VIII** de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y **4** inciso **m)** de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo.

De esta forma, los artículos **70** fracción **XXXVI** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo **8** numeral **1** fracción **VII** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos **43** de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y **45** de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su



totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.

X. DECISIÓN. Por lo expuesto en párrafos anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos **1, 2, 3, 4, 5, 10** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos **29 fracción IV, 30 fracción I, 72, 73, 74 fracciones I, II y V, 75 fracción II y 76 inciso a)** de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es de resolverse la presente controversia a través de las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA. La competencia de esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para conocer y resolver de la presente controversia; la personalidad y capacidad de las partes; la procedencia de la vía Administrativa elegida y la acción puesta en ejercicio por el actor; han quedado debidamente acreditadas en autos.

SEGUNDA. La parte actora, [REDACTED], acreditó parcialmente los elementos constitutivos de su acción; las autoridades demandadas **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO** y la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, no acreditaron sus excepciones y defensas, mientras que la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO**, sí acreditó sus excepciones y defensas, en consecuencia:

TERCERA. Se decreta el sobreseimiento del presente juicio respecto del crédito determinado a través del documento identificado con el folio **M421004195932**, que corresponde al crédito fiscal determinado por concepto de falta de pago de refrendo relativo al ejercicio fiscal **2021**, por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VII de la presente resolución.

CUARTA. Se declara la nulidad lisa y llana de la cédula de notificación de infracción identificada con número de folio **333936844**, emitidas por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y de la cédula de notificación de infracción identificada con número de folio **201943519112**, a cargo de personal adscrito a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara., recaídas al vehículo identificado con el número de palcas **JDW4525**; por los razonamientos, fundamentos y consideraciones vertidos en el considerando VIII de la presente resolución.

QUINTA. Se ordena a las Autoridades demandadas efectuar la cancelación de las resoluciones declaradas nulas y referidas en el punto anterior, así como sus respectivos accesorios, emitiendo el acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones relativas en las bases de datos o sistemas respectivos, informando y acreditando todo ello ante esta Sala Unitaria.

NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO.

Así lo resolvió y firma la **LICENCIADA ANA LOURDES LÓPEZ ORDÓÑEZ**, Secretario Proyectista en funciones de Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por Ministerio de Ley, quien actúa en sustitución legal del Titular de la misma **MAGISTRADO MAESTRO ALBERTO BARBA GÓMEZ**, de conformidad con lo establecido por los artículos **14.1 y 19 fracción VI** de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con los diversos numerales **24 y 25 fracción II** del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como con sustento el acuerdo tomado en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de enero del año 2023 dos mil veintitrés, y en atención a la licencia concedida al señalado en último término, por la **SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**, en la Sexta Sesión Ordinaria de fecha 23 veintitrés de marzo del año 2023 dos mil veintitrés; quien actúa ante su Secretario Proyectista **LICENCIADO VICTOR GERARDO GUARDIOLA PLASCENCIA**, quien autoriza y da fe.



La Sexta Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.